

NIT.899.999.055-4

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

Bogotá D.C., 05-10-2017

Señor

VÍCTOR HUGO FIGUEROA VENEGAS

Correo electrónico: vihufi000@gmail.com

Carrera 18 No. 16 - 60 Barrio Aire Libre

Pasto - Nariño

Asunto: Tránsito. Prescripción y notificación de mandamiento de pago.

En atención a su correo electrónico, radicado en la planta central de la entidad bajo el MT-20173030085482 de 2017, mediante el cual presenta inquietudes concernientes al proceso contravencional -aludiendo a la prescripción y notificación del mandamiento de pago-, esta Oficina Asesora de Jurídica se pronuncia, en los siguientes términos:

## PETICIÓN

1. *"Informar si sus pronunciamientos deben o no ser atendidos por los entes territoriales, teniendo en cuenta que Ustedes son la máxima autoridad de Tránsito y Transporte de la Nación.*
2. *Se indique de forma precisa si están o no obligadas las entidades territoriales a verificar bases de datos públicas o privadas con el fin de establecer una dirección de notificaciones de los deudores, para con posterioridad y dependiendo de que se encuentre o no dirección del deudor se notifique de forma, (sic) personal, por correo (Art.826 E.T.) o por conducto de publicación (Art.563 del E.T.); ruego explicar el proceso de notificación del mandamiento de pago.*
3. *Se indique los requisitos de la notificación por publicación, precisando si se debe o no publicar la parte resolutive del acto administrativo o si por el contrario publicar una lista de deudores es válido para tener por realizada la notificación por conducto de publicación.*
4. *Se informe si su Ministerio ha informado o indicado a las entidades territoriales, que el termino (sic) de prescripción depende exclusivamente de lo estipulado por el Art.159 de la Ley 769 de 2002, por ser norma especial, por lo que solo se tiene tres (3) años para la notificación del mandamiento de pago y otros tres (3) años para el cobro de la multa una vez notificado dicho mandamiento.*
5. *Se informe si su Despacho puede tomar medidas disciplinarias o administrativas en contra de las Dependencias encargadas del Tránsito y Transporte de los entes territoriales Gobernación del Tolima, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Neiva, Alcaldía de Cali, Alcaldía Distrital de Bogotá, entre otros, por crear estados de inseguridad jurídica al aumentar el termino (sic) de prescripción del legalmente estipulado (Art.159 de la Ley 769 de 2002) a un término indefinido o a un término de cinco (5) años contemplado en el Estatuto Tributario para otro tipo de obligaciones."*

NIT.899.999.055-4

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

Sobre lo anterior, este Despacho presenta las siguientes consideraciones:

Es preciso señalar, que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 087 de 2011, son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica de este Ministerio, las siguientes:

*"8.1. Asesorar y asistir al Ministro y demás dependencias del Ministerio en la aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales.*

*8.8. Atender y resolver las consultas y derechos de petición relacionados con las funciones de la oficina, presentados ante el Ministerio por personas de carácter público o privado".*

Significa lo anterior, que sus funciones son específicas no siendo viable entrar a analizar un caso en concreto y determinar si las actividades desarrolladas por los entes de transporte y tránsito del país se ajustan o no a la legislación vigente, así las cosas, este Despacho de acuerdo a sus funciones se referirá de manera general y en lo que le compete al tema objeto de análisis, así:

Este Despacho procederá en los párrafos subsiguientes, a resolver de manera integral las inquietudes expresadas en su consulta, sobre el proceso contravencional vigente aludiendo a la prescripción y notificación del mandamiento de pago -reiterando el cumplimiento del marco legal expuesto en el oficio No.20161340485851 de 2016 citado en su comunicado-, teniendo en cuenta que los considerandos emitidos en el presente escrito determinan de manera concreta las obligaciones a cargo de las autoridades de tránsito y de los administrados, así como el control ejercido por las autoridades.

Respuesta al punto 1:

Respecto a los pronunciamientos jurídicos emitidos por este Despacho -aludidos en su escrito-, es necesario invocar el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."*, a saber:

*"Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución."* (Subrayado nuestro).

Aunado a lo expuesto, es preciso presentar el aparte mencionado por el Dr. Jaime Orlando Santofimio G. -Tratado de Derecho Administrativo. T. II., página 196 y siguientes-, al señalar *"Los conceptos no obligan a la administración y los particulares se encuentran libertad de aceptarlos o no. No son actos administrativos, en la medida en que no adoptan decisiones, ni están llamados a producir efectos jurídicos, salvo que la administración con posterioridad los convierta en obligatorios"*.

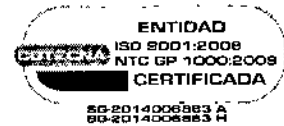
De igual manera, cabe referirse al texto del Dr. Gustavo Penagos, en El Acto Administrativo. Tl. Página 228 y siguientes, el cual ha comentado: *"Se observa del estudio de la norma anterior (art. 25 C.C.A.), que los conceptos que emitan las autoridades, conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, ni comprometen la responsabilidad de la entidad, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución, simplemente, por tratarse de meros conceptos, que no contienen decisiones, sino pareceres o criterios de la respectiva entidad"*.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT.899.999.055-4

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

No obstante, cabe subrayar que las autoridades de tránsito y transporte se encuentran sometidas -sin excepción- al acatamiento de lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el Decreto 1079 de 2015 y demás normatividad reglamentaria y/o modificatoria.

A este tenor, es preciso invocar apartes del artículo 13 de la Ley 1564 de 2012 *"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"*, el cual establece: *"Artículo 13. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (...)"* (Subrayado nuestro).

#### Respuesta a los puntos 2 y 3:

En relación a la notificación del mandamiento de pago dentro del cobro coactivo -referida en su comunicado- es necesario invocar apartes del artículo 826 del Estatuto Tributario, a saber:

*"Artículo 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.*

*Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.*

*Parágrafo. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor."* (Subrayas nuestras).

Conforme a lo anterior, es preciso señalar que la normatividad precedente relacionada con la notificación del mandamiento de pago -dentro del procedimiento coactivo- es explícita, subrayando que la ley aplica para todo el territorio nacional y en consecuencia, no existen excepciones para desatender las condiciones establecidas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Ley 1437 de 2011, el Estatuto Tributario y demás normas complementarias.

Así las cosas, en el evento de incumplirse por parte de las autoridades de tránsito con el procedimiento contravencional y/o el proceso de cobro coactivo, establecidos en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en el Estatuto Tributario, respectivamente -refiriéndonos a la notificación del mandamiento de pago- dichas autoridades estarían vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa -consagrados en el artículo 29 de la Constitución Nacional-, quedando expuestas a acarrear las consecuencias administrativas y disciplinarias del caso.

De otro lado, en relación a la notificación por publicación expuesta en el artículo 563 del Estatuto Tributario -citada en el punto 3 de su comunicado-, es necesario invocar la norma ibidem, la cual señala:

*"Artículo 563. (Modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 59). Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a*



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT.899.999.055-4

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

*la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.*

*Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.*

*Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número identificación personal.” (Subrayas y resalta nuestras).*

Al respecto, frente a la notificación por publicación señalada en el artículo 563 ibídem, cabe señalar que dicho procedimiento es aplicable al procedimiento establecido para las obligaciones tributarias, a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores y/o declarantes, quienes se obligan al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Dicha situación difiere de la presentada en la notificación del mandamiento de pago en el procedimiento de cobro coactivo, reiterando al respecto, que debe acatarse lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario -transcrito en precedencia-.

#### Respuesta al punto 4:

Sobre el particular, frente al desarrollo del procedimiento contravencional, aludiendo al fenómeno de la prescripción -referido en su escrito-, es menester invocar apartes del oficio circular MT-20171340298651 del 27 de julio de 2017 emitido por esta Oficina Asesora, señalando:

“(…)

#### La Prescripción:

*“La prescripción es una institución jurídica de regulación legal, en virtud de la cual se adquieren o extinguen derechos, por haberse agotado el término fijado por la Ley.*

*Al igual que para la caducidad, para el tema de la prescripción, en la sentencia C-401 de 2010, con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional la ha descrito así:*

*La prescripción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción, y ocurre cuando quienes tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal dejan vencer el plazo señalado por el Legislador para el efecto sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo que implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra de la persona beneficiada con la prescripción, y su fundamento se encuentra en el*

NIT.899.999.055-4

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

*principio de la seguridad jurídica. La prescripción de la acción penal tiene una doble connotación: por un lado, obra a favor del procesado, quien se beneficia de la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica, pues no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra; y por otro, implica para el Estado una sanción frente a su inactividad.*

*Esta definición nos lleva a considerar que cuando la administración no ha realizado las actividades propias de su competencia, esto es adelantar un proceso, agotar todas las etapas del mismo y decidir de fondo, con la respectiva ejecutoria y notificación, perderá dicha prerrogativa y cesa su facultad sancionatoria. Esta figura se da por el vencimiento del término y puede ser alegada por el interesado o decretarse de oficio, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1066 de 2006.*

*El fenómeno de la prescripción opera en materia de tránsito, cuando la administración representada por los organismos de tránsito deja vencer el plazo señalado por el legislador sin haber iniciado el proceso coactivo, el cual se entiende surtido cuando se dicta el mandamiento de pago de una resolución debidamente ejecutoriada.*

A la vez el artículo 206 del Decreto 019 de 2012, faculta a las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho generador de sanciones por violación a las normas de tránsito para adelantar el procedimiento respectivo y hacer efectivo el cobro de la sanción, invistiéndolas de jurisdicción coactiva. Señala igualmente esta disposición que el término de prescripción es de tres (3) años, contados a partir de la ocurrencia del hecho.

**ARTÍCULO 206. CUMPLIMIENTO.**

El artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, quedará así:

*"Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario."*

Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción.

*Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los mismos ...." (Negrilla y subraya fuera de texto)*

En ese orden de ideas, la prescripción en materia de tránsito se presenta cuando la administración no inicia el proceso de jurisdicción coactiva dentro de los tres (3) años

Para contestar cite:  
Radicado MT No.: 20171340415211



05-10-2017

contados a partir de la ocurrencia del hecho (1), el cual se entiende interrumpido cuando se dicta mandamiento de pago (2).

#### Acuerdos de Pago

Por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 (3) las normas que regulan el procedimiento de cobro coactivo que deben adelantar las autoridades públicas investidas de jurisdicción coactiva es el regulado en el Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1.989. En este sentido dispone la Ley 1066 de 2006:

*"Artículo 5o. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.*

..."

*La norma Ibídem que modifica el Estatuto Tributario, consagra la oficiosidad de la prescripción en los procedimientos de cobro de obligaciones a favor del Estado al señalar (...)*

*Artículo 17. Lo establecido en los artículos 8° y 9° de la presente ley para la DIAN, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras entidades públicas. Para estos efectos, es competente para decretar la prescripción de oficio el jefe de la respectiva entidad".*

(...)

*Así las cosas, es deber de las autoridades de tránsito de todo el País, pronunciarse sobre la declaratoria de los fenómenos de Caducidad, la cual opera a petición de parte o ser declarada de oficio; en cuanto a la Prescripción, esta es decretada de oficio, lo que no obsta para que sea solicitada por la parte que siendo deudora tiene fundamentos para considerar le sea aplicable esta figura (...)" (Subrayas y resaltas nuestras).*

Conforme lo anterior, cabe señalar que las normas expuestas aplicables al procedimiento contravencional -refiriéndonos al fenómeno de la prescripción-, así como el desarrollo del proceso coactivo, es explícita, subrayando que la ley aplica para todo el territorio nacional y en consecuencia, no existen excepciones para desatender las condiciones establecidas en el ordenamiento legal vigente.

Así las cosas, es pertinente recalcar que como quiera que en materia de multas por infracciones al tránsito existe norma especial la cual señala que estas prescriben en el término de 3 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, el término que se

<sup>1</sup> Ejecutoria del acto administrativo sancionatorio

<sup>2</sup> H. Consejo de Estado. Sentencia Exp. 11001000000020030213101. Octubre 13 de 2006. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Mg. Ponente Darío Quiñonez Pinillo.

<sup>3</sup> Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 6001242

<http://www.mintransporte.gov.co> - PQRS-WEB: <http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/>

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 018000112042. Código Postal 111321

NIT.899.999.055-4



05-10-2017

contaría nuevamente sería 3 años, y el procedimiento aplicable para su recaudo es el establecido en el Estatuto Tributario.

A este tenor, es pertinente reiterar la obligatoriedad de cumplirse íntegramente por los Organismos de Tránsito el procedimiento contravencional establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y demás normas reglamentarias, así como lo dispuesto en el Estatuto Tributario.

Respuesta al punto 5:

Refiriéndonos a las eventuales medidas disciplinarias y/o administrativas que involucran a los Organismos de Tránsito por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales, es necesario manifestar que la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE es la entidad encargada de controlar, inspeccionar y vigilar los Entes de Tránsito, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002 y las funciones delegadas por el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000.

Así mismo, es pertinente señalar que no obstante fungir el Ministerio de Transporte como ente regulador en materia de transporte y tránsito, sus decisiones no son oponibles a las de autoridades de tránsito, ni de las entidades de apoyo en esa materia, dado que éstos son entes autónomos e independientes, per-teneciendo a la jurisdicción de las Alcaldías y Gobernaciones, siendo improcedente que esta cartera ministerial llegare a intervenir las decisiones emitidas por los entes de tránsito con la intención de modificarlas, ya que estaría invadiendo sus funciones administrativas y su competencia.

A este tenor, cabe mencionar que de presentarse irregularidades por parte de los Organismos de Tránsito, o por otras entidades de orden público y/o privado o de personas naturales, es deber de todo ciudadano colocar en conocimiento de los Organismos de Control del Estado las conductas de los cuales se tenga conocimiento, para darse inicio a las acciones legales que correspondan.

Para terminar, este Despacho señala que el articulado correspondiente a las normas citadas -inmersa en la actividad reguladora ejercida por el Ministerio de Transporte en materia de tránsito y transporte-, puede consultarse en la página web [www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co) para todos los usuarios a nivel nacional.

En estos términos, se absuelve de forma abstracta el objeto de consulta, atendiendo lo preceptuado en los artículos 14 y 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,



ANDRÉS MANCIPE GONZÁLEZ  
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Proyectó: Mario A. Herrera Zapata  
Revisó: Claudia Montoya Campos  
Revisó: Gisella Beltrán Zambrano  
Fecha de elaboración: 05/10/2017  
Número de radicado que responde: 20173030085482  
Tipo de respuesta: Total (X) Parcial ( )